



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05001-31-05-017-2022-00294-01  
Demandante: Jaime León Serna Molina  
Demandado: Itaú Corpbanca Colombia S.A.  
Asunto: Apelación de Sentencia  
Procedencia: Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín  
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Temas: Ineficacia del acta de conciliación – Reconocimiento anticipado de la pensión jubilación convencional

**Medellín, marzo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)**

En fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO con ausencia justificada y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte actora, respecto de la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Jaime León Serna Molina contra Itaú Corpbanca Colombia S.A. conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-017-2022-00294-01.

**1.- ANTECEDENTES**

## **1.1.- DEMANDA**

El señor Jaime León Serna Molina instauró demanda ordinaria laboral pretendiendo se declare la ineficacia de las cláusulas del acta de conciliación mediante la que Itaú Corpbanca Colombia S.A. le reconoció de manera anticipada el derecho a la pensión de jubilación por ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987.

Consecuentemente, procura se declare que la pensión de jubilación convencional reconocida por la entidad accionada tiene el carácter de ser vitalicia, compatible y excluyente con la legal, y que la misma debió liquidarse con base en el 100% del sueldo promedio devengado en el último año anterior al retiro, indexado desde la fecha de terminación del contrato y hasta la fecha en que cumplió la edad mínima.

Finalmente, solicita el reconocimiento de los intereses moratorios sobre el mayor valor adeudado por concepto de reajuste pensional, o en subsidio, la indexación de las condenas, con las costas, debidamente indexadas al momento del pago.

En respaldo de sus pedimentos, el señor Jaime León Serna Molina expuso que nació el 21 de agosto de 1951, que laboró al servicio de Itaú Corpbanca Colombia S.A. entre el 01 de julio de 1976 y el 04 de mayo de 1998, que el último cargo que desempeñó fue el de Subgerente Operativo en la ciudad de Medellín, y que el último salario devengado ascendió a la suma de \$1.698.962.

Aseveró que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, por cuando la misma no había sido modificada, derogada, transformada o denunciada para la fecha en la que acumuló 20 años de servicio, ni para cuando arribó a los 55 años de edad, siendo las condiciones contenidas en ésta, y no otras, las que debieron tenerse en cuenta al momento de reconocer la pensión de jubilación convencional, específicamente en lo que respecta a la compatibilidad de la jubilación anticipada con la pensión legal, y el monto de la pensión

convencional, que afirma debió liquidarse con base en el 100% del sueldo promedio devengado en el año anterior al retiro, indexado desde la fecha de terminación del contrato, 04 de mayo de 1998, y hasta la fecha en que cumplió la edad mínima, 21 de agosto de 2006, que ascendería la suma de \$3.195.308 como primera mesada pensional (doc.01, carp.01).

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

Itaú Corpbanca Colombia S.A. admitió que el señor Jaime León Serna Molina laboró al servicio de Banco Comercial Antioqueño S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., entre el 01 de julio de 1976 y el 04 de mayo de 1998, que el último cargo que desempeñó fue el de Subgerente Operativo en la ciudad de Medellín, y que la relación de trabajo terminó por mutuo acuerdo entre las partes, mediante acta de conciliación suscrita el 30 de abril de 1998 ante el Ministerio del Trabajo.

Admitió que la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 y la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, consagran el derecho a una pensión de jubilación convencional, para los trabajadores que después de haber prestado sus servicios durante 20 años a la compañía, hubieren arribado los 50 años de edad, en el caso de las mujeres, o 55 años de edad, en el caso de los hombres, que en vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 el actor solo contaba con 11 años de servicio y 36 años de edad, que en vigencia de la Convención Colectiva 1991-1993, siendo ésta la que se encontraba vigente para la terminación del contrato de trabajo, el demandante solo tenía 17 años de servicio y 42 años de edad, que para la fecha de terminación de la relación de trabajo, el pretensor, si bien superaba los 20 años de servicio en la compañía, solo contaba con 46 años de edad, y que fue por mera liberalidad que la empresa le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 21 de agosto de 2006, cuando cumplió los 55 años de edad.

Aseveró que desde el 21 de agosto de 2006 pagó en favor del actor las mesadas de la pensión de jubilación, liquidada sobre el salario básico devengado durante el

último año, teniendo en cuenta incluso las bonificaciones, aunque en la convención se pactó que el salario base de liquidación sería el sueldo básico devengado; que desde la fecha en la que terminó la relación de trabajo, venía cancelado los aportes para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; y que cesó el pago de ambas obligaciones desde el momento en que Colpensiones E.I.C.E. reconoció la pensión de vejez en favor del demandante, por haber sido inferior respecto del monto de la pensión de jubilación, pasando a estar exclusivamente a cargo de la referida entidad, por haberse configurado plenamente la subrogación pensional.

Dijo que en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 se acordó que lo establecido en relación a la pensión de jubilación se aplicaría en consonancia con el Decreto 3041 de 1966, por el cual el ISS asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, es decir, que en la misma ya se había pactado la compatibilidad por subrogación pensional, que el actor causó el derecho a la pensión de jubilación con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, que establece como regla general la compatibilidad de las pensiones de jubilación y vejez, y que, en todo caso, en el acuerdo de conciliación se pactó que la pensión de jubilación se compartiría con la pensión de vejez.

Finalmente, y en oposición a las pretensiones, excepcionó cosa juzgada; inexistencia de la obligación; prescripción y compensación (doc.05, carp.01).

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 11 de noviembre de 2022, absolvió a Itaú Corpbanca Colombia S.A. de las pretensiones incoadas por el señor Jaime León Serna Molina, declaró probada la excepción de cosa juzgada, y condenó en costas al demandante, en favor de la demandada (doc.09, carp.01).

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado judicial del señor Jaime León Serna Molina interpuso el recurso de alzada en orden a que se revoque la sentencia absolutoria de primera instancia, y en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda arguyendo que la Convención Colectiva de Trabajo aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, es aquella que estaba vigente para el momento en que se causó el derecho a la pensión, que el demandante causó el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional cuando cumplió los 20 años de servicio, en los términos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, siendo que las convenciones posteriores no modificaron, derogaron ni transformaron lo acordado en materia de pensiones; que la referida convención consagra el derecho a la prestación sobre el 100% del salario; que el acta de conciliación suscrita de entre las partes, no establece que la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 fuera la aplicable para establecer la tasa de reemplazo y compatibilidad de la prestación reconocida; que la pensión convencional por incapacidad total fue la única establecida en dicho cuerpo normativo con carácter incompatible, debiéndose entender, bajo el principio de interpretación sistemática, que las demás pensiones, incluida la de jubilación, tienen el carácter de compatibles; que la expresión “vitalicia” hace referencia al reconocimiento de la prestación hasta el final de la vida, siendo entonces contrario a la convención entender que el reconocimiento de la pensión de jubilación era temporal; que la compatibilidad así pactada en la referida convención, no riñe con lo indicado en el Decreto 3041 de 1966 que solo establece la figura de la compartibilidad respecto de aquellos trabajadores que tenían más de 15 años de servicio al momento de afiliarse al ISS; que al actor le asiste el derecho a la aplicación íntegra de la convención, porque las leyes oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar el derecho solo son aplicables para quienes iniciaron su vinculación con el Banco Comercial Antioqueño a partir del 01 de septiembre de 1985; y que, con la derogatoria orgánica del Decreto 758 de 1990, con la expedición la Ley 100 de 1993, debe tenerse como derogado el Decreto 2879 de 1985, entendiendo que la compatibilidad, y no la compartibilidad, es la regla general (min 00:50:20, doc.09, cap.01)

### **1.5. - ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, la apoderada judicial de Itaú Corpbanca Colombia S.A. solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, insistiendo en que la prestación pensional reconocida en favor del actor tuvo como origen la mera liberalidad de la empresa, en la medida en que el actor no había causado el derecho a la pensión de jubilación convencional por cuanto no acreditaba el requisito de la edad para la fecha de terminación del contrato, y arguyendo que la Ley 6 de 1945, artículo 12, la Ley 90 de 1946, artículo 60, el Decreto 3041 de 1966, artículos 60 y 61, ya consagraban la subrogación patronal de las obligaciones pensionales a cargo del ISS, razón por la cual, la jubilación reconocida en favor del demandante tiene el carácter de compartida y excluyente con la pensión de vejez legal (doc.03, carp.01).

## **2. - CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

### **2.2. - HECHOS NO CONTROVERTIDOS**

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el 01 de julio de 1976 el señor Jaime León Serna Molina suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con el Banco Comercial Antioqueño S.A., para desempeñar el cargo de Auxiliar de Transferencias en la ciudad de Medellín, con una remuneración básica mensual de \$2.727 mensuales (pág.362, doc.02, carp.01; pág.334, doc.07, carp.01).

- Que el Banco Comercial Antioqueño S.A., cambió su denominación a la de Banco Santander Colombia S.A., mediante la Escritura Pública No.2157 del 23 de junio de 1997 de Notaría 29 de Medellín; a la de Banco Corpbanca Colombia S.A. a través de la Escritura Pública No.2008 del 09 de agosto de 2012 de Notaría 23 de Bogotá; y a la de Itaú Corpbanca Colombia S.A., mediante la Escritura Pública No.1208 del 16 de mayo de 2017 de Notaría 25 de Bogotá (págs.605-692, doc.02, carp.01 – ver páginas 606-607).
- Que el 30 de abril de 1998 el señor Jaime León Serna Molina suscribió un acta de conciliación con el Banco Santander Colombia S.A, en la que acordaron dar por terminada la relación de trabajo de mutuo acuerdo, a partir del 04 de mayo de 1998, y en la que convinieron, el reconocimiento de una pensión jubilación convencional, una vez cumpliera los 55 años de edad, liquidada sobre el 75% del promedio salarial devengado en el último año de servicio, debidamente indexado, esto parafraseando el texto de lo acordado, que será examinado en detalle en la resolución de los problemas jurídicos planteados (págs.363-366, doc.02, carp.01; págs.335-338, doc.07, carp.01).
- Que la primera mesada fue liquidada con el promedio del sueldo devengado durante el último año de servicios, incluyendo, los salarios, subsidios de transporte, bonificaciones extralegales, horas extras y compensatorios ( $\$15.064.618 + \$226.026 + \$3.953.625 + \$1.143.281 = \$20.387.549$ ;  $\$20.387.549 / 12 = \$1.698.962$ ); ingreso base de liquidación al que le aplicó una tasa de reemplazo del 75% ( $\$1.698.962 * 75\% = \$1.274.222$ ); suma que fue indexada año tras año, desde la fecha de retiro y hasta la fecha del disfrute, arribándose a la suma de \$2.396.481 como mesada pensional para el 21 de agosto de 2016 (pág.370, doc.02, carp.01; pág.332, doc.07, carp.01).
- Que Itaú Corpbanca Colombia S.A. canceló en favor del demandante las mesadas causadas desde el 21 de agosto de 2006, y hasta el 31 de marzo de 2012 (págs.370-383, doc.02, carp.01; pág.318-331, doc.07, carp.01).

### **2.3. - PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER**

Deberá la Sala determinar en primer lugar, ¿si la pensión de jubilación reconocida en favor del señor Jaime León Serna Molina es voluntaria o convencional? y en caso de establecerse que la prestación es convencional, habrá que determinar ¿cuál es la Convención Colectiva de Trabajo que la rige o gobierna?

Adicionalmente, se desentrañará ¿si la pensión de jubilación convencional es compatible o compatible con la pensión de vejez legal?

Finalmente, habrá que esclarecer ¿si al actor le asiste el derecho al reajuste de la pensión de jubilación convencional, con base el 100% del salario devengado en el último año?

#### **2.4. - TESIS DE LA SALA**

El problema jurídico propuesto se resolverá bajo la tesis según la cual (i) la pensión de jubilación reconocida en favor del actor tiene el carácter de convencional, bajo el entendimiento de que en la conciliación las partes anticiparon su reconocimiento (ii) la prestación se rige por las disposiciones de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, siendo que fue la última que reguló lo referido a las pensiones de jubilación, disposiciones que pervivieron bajo el amparo de la Convención Colectiva de Trabajo 1995-1997, vigente para la fecha de causación del derecho (iii) y es compatible con la pensión de vejez legal, por haberse convenido y causado con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, sin que se hubiere establecido expresamente su compatibilidad, (iv) estando prescrita cualquier suma que se hubiere causado por concepto de reajuste pensional, teniendo en cuenta que transcurrieron más de tres años desde la fecha en la que se pagó la última mesada y la fecha en la que se formuló la presente acción, sin que se acredite que se generó un mayor valor que estuviere a cargo del empleador. Consecuentemente, la sentencia absolutoria de primer grado será CONFIRMADA.

#### **2.5. - PREMISAS NORMATIVAS**



### 2.5.1.- Naturaleza jurídica de la pensión extralegal

Sea lo primero relieves que en el acta de conciliación suscrita el 30 de abril de 1998, el señor Jaime León Serna Molina y el Banco Santander Colombia S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., expresamente acordaron:

*“EL BANCO le respetará el derecho a jubilación convencional una vez cumpla los 55 años de edad. Una vez suceda esto, el Banco empezará a pagar el valor de la pensión convencional [...]”* (págs.363-366, doc.02, carp.01; págs.335-338, doc.07, carp.01).

Así las cosas, es claro para la Sala que la voluntad de las partes fue anticipar el reconocimiento de la pensión jubilación **convencional**, independiente de que se hubiera hecho alusión o no al cuerpo normativo que consagraba el derecho prestacional, esto es, a la Convención Colectiva de Trabajo que regía para la época; ello así, por cuanto en el acta de conciliación se dejó expresamente sentado que la pensión que se concedería sería la de jubilación convencional.

Adicionalmente, se advierte que el criterio esbozado por la entidad demandada, y según el cual, la prestación pensional reconocida se originó en la mera liberalidad de la empresa, en la medida en que el trabajador no acreditaba la edad mínima convencional para la fecha en la que cesó la prestación del servicio, esto es, porque no había causado el derecho a la pensión convencional, contraría el criterio sentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, tratándose de pensiones extralegales, ha reiterado que la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación, así:

*“En tal dirección, es relevante destacar que los derechos pensionales gozan de la particularidad de que se concedan para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condición futura y natural al ser humano.”*

*Específicamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestación de los servicios*

*personales en favor de un empleador, de tal suerte que, además de compensar el deterioro laboral, también funcionan como premio a la fidelidad con aquel.*

*Tal interpretación, además, resulta ser la más favorable para la accionante en el proceso ordinario que motivó la presente acción, y si bien por regla general, las convenciones colectivas de trabajo gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación.*

*Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal y como lo adocrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.*

*Lo anterior, en la medida que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 Constitucional” (CSJ SL4550-2018, SL262-2019, SL4659-2020, SL3962-2021, SL4232-2022, SL420-2023)*

En idéntico sentido, la Corte Constitucional ha sostenido:

*“... cuando una norma, incluyendo las convenciones colectivas, admite varias posibilidades de interpretación, la autoridad judicial tiene el deber de aplicar el principio in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio escogiendo la que resulta más benéfica para el trabajador, de lo contrario, se vulneraría el derecho al debido proceso y el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución, postura que ha sido asumida por esta Corte en las Sentencias SU-241 de 2015, SU-113 de 2018, SU-267 de 2019, SU-445 de 2019 y SU-027 de 2021.*

*En ese orden de ideas, la Sala considera que en el caso de la señora María Cristina Duque Barrera tanto la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín como la Sala de Descongestión No. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desconocieron el precedente constitucional en la materia, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y, en consecuencia, a la igualdad que le eran predicables frente al*

reconocimiento de su pensión convencional de jubilación de cara a la interpretación del artículo 54 de la convención colectiva, que permite que el requisito de la edad se pueda alcanzar con posterioridad a la desvinculación laboral” (Sentencia SU-228 de 2021)

Consecuentemente, esta corporación colige que la pensión de jubilación reconocida por el Banco Santander Colombia S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., en favor del señor Jaime León Serna Molina, tiene el carácter de convencional, y no voluntaria, tal y como acertadamente lo consideró la *a quo*.

## **2.5.2.- Normativa que rige la pensión convencional**

Ahora bien, en el plenario se encuentra acreditado que el Banco Comercial Antioqueño S.A. suscribió con la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios – ACEB, las siguientes Convenciones Colectivas de Trabajo:

✓ **1983-1987**, vigente entre el 01 de septiembre de 1983 y el 31 de agosto de 1985 (págs.01-57, doc.02, carp.01), que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...*” (ver página 35, doc.01, carp.01)

✓ **1985-1987**, vigente entre el 01 de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1987 (págs.77-105, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **1987-1989**, vigente entre el 01 de septiembre de 1987 y el 31 de agosto de 1989 (págs.117-148, doc.02, carp.01), que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...*” (ver página 132, doc.01, carp.01).

✓ **1989-1991**, vigente entre el 01 de septiembre de 1989 y el 31 de agosto de 1991 (págs.149-180, doc.02, carp.01), que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: *“ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...”* (ver página 164, doc.01, carp.01).

✓ **1991-1993**, vigente entre el 01 de septiembre de 1991 y el 31 de agosto de 1993 (págs.181-217, doc.02, carp.01), que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: *“ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...”* (ver página 199, doc.01, carp.01).

✓ **1993-1995**, vigente entre el 01 de septiembre de 1993 y el 31 de agosto de 1995 (págs.219-228, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **1995-1997**, vigente entre el 01 de septiembre de 1995 y el 31 de agosto de 1997 (págs.234-246, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **1997-1999**, vigente entre el 01 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999 (págs.252-269, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **1999-2001**, vigente entre el 01 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2001 (págs.274-293, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **2001-2003**, vigente entre el 01 de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2003 (págs.298-316, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

✓ **2003-2005**, vigente entre el 01 de septiembre de 2003 y el 31 de agosto de 2005 (págs.317-333, doc.02, carp.01), que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación; y

✓ **2005-2007**, vigente entre el 01 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2007 (págs.335-358, doc.02, carp.01) que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación.

Para determinar entonces cuál es la Convención Colectiva de Trabajo que rige o gobierna la pensión de jubilación convencional reconocida en beneficio del señor Jaime León Serna Morares, cumple memorar que el actor laboró al servicio del Banco Santander Colombia S.A., antes Banco Comercial Antioqueño S.A, desde el 01 de julio de 1976 y hasta el 04 de mayo de 1998, y que acreditó los 20 años de servicio exigidos en las anteriores Convenciones Colectivas de Trabajo para causar el derecho a la pensión de jubilación convencional, en la fecha 01 de julio de 1996, misma para la cual se encontraba vigente la Convención Colectiva de Trabajo 1995-1997, pero como ésta, ni la inmediatamente anterior (1993-1995) establecen ninguna regulación en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de jubilación, debe entenderse, según lo establecido en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que el cuerpo normativo que rige la materia en el caso concreto del señor Jaime León Serna Molina es la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993.

Ahora bien, es cierto que el artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 establece:

*“ARTÍCULO 71º. PENSIONES DE JUBILACION. Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente (compilación 1.985-1.987), artículos 54o. a 70o. inclusive, se aplicará solamente a quienes al 31 de agosto de 1.985*

*tengan celebrado contrato de trabajo por escrito y vigente en esa fecha con el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. A quienes ingresen con vínculo laboral a partir del 1 de septiembre de 1.985 no se les aplicará el régimen de pensiones ya mencionado y se someterá en materia de pensiones a las leyes y demás disposiciones oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar de su derecho”. (ver página 202, doc.01, carp.01).*

Sin embargo, para la Sala es claro que la referida cláusula convencional lo que hace es restringir el acceso a los beneficios pensionales pactados en la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, y que compila los consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, para los trabajadores vinculados a la compañía mediante contrato de trabajo escrito y vigente al 31 de agosto de 1985, esto es, la cláusula convencional no refiere que a los trabajadores inmersos en la condición allí descrita (contrato vigente al 31 de agosto de 1985), le sea aplicable la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, sino que dice que los beneficios allí consagrados, pero compilados en la nueva convención, solo favorecen a los trabajadores que acrediten la referida condición.

Corolario de lo anterior, se colige que la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 es la que rige y/o gobierna la pensión de jubilación convencional reconocida en favor del señor Jaime León Serna Molina, vigente para la fecha en que se causó la prestación.

### **2.5.3.- Compartibilidad de la pensión convencional**

El artículo 76 de la Ley 90 de 1946 establece:

*“ARTICULO 76. El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales”.*

A su vez, el artículo 60° del Decreto 3041 de 1967 indica:

*ARTICULO 60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos (\$800.000) moneda corriente o superior, ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono.*

También el artículo 5° del Decreto 2879 de 1985, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 224 del mismo año, preceptúa:

*“ARTÍCULO 5o. Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.*

*La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.*

*PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.*

Finalmente, el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, a través del cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, prevé:

*“ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros*

Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.

En adición al compendio normativo citado, la cláusula 58 de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 regula:

“ARTÍCULO 58°. La pensión aquí fijada excluye y reemplaza que se sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacerse efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. Si optare por la que se fija en la presente codificación, se entiende que el pago de ella incluye la fijada por la ley y por consiguiente el Banco al reconocerla cumple con las disposiciones legales al respecto”. (ver páginas 199-200, doc.01, carp.01).

Sobre este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suma de Justicia, en la Sentencia SL376-2023, reiteró:

“De entrada, debe señalarse que la razón no está de parte de la recurrente, puesto que ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el punto objeto de controversia frente a la misma accionada, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL4545-2019, reiterada en la CSJ SL3175-2021, en donde se sostuvo que, aun cuando la regla general, es que las prestaciones pensionales extralegales, otorgadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, comportan el carácter de compartibles, con ocasión de lo previsto por el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de igual anualidad, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, dicha circunstancia no obsta para que las partes, pacten su compatibilidad, pues no existe restricción alguna frente a un acuerdo de voluntades de tal connotación.

Precisamente, la Corte en sentencia CSJ SL2238-2021, al rememorar otras en ese mismo sentido, entre otras, la CSJ SL4545-2019, sostuvo:



*«No sobra precisar que si bien los artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen la compatibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador con la vejez por cuenta del ISS, la norma inicialmente mencionada, establece que el primero deberá cotizar al ISS hasta tanto el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando por su cuenta únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el instituto y la de jubilación que venía percibiendo, y que, además, para la financiación de la prestación que llegase a conceder el ISS, el empleador debe trasladar el valor correspondiente al bono pensional, ello, per se, no impedía que las partes en forma voluntaria, como en este caso a través de la convención colectiva de trabajo, dispusieran que la pensión a cargo del empleador fuera compatible con la de vejez».*

*En el mismo sentido, en la sentencia CSJ SL4080-2018, adoctrinó:*

*Desde el punto de vista jurídico, propio de ambos cargos, el Tribunal no incurrió en error alguno al sostener que las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, son, en principio, compartidas con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, salvo que se exprese en ellas mismas que son compatibles. Tal orientación es la que se deriva expresamente de lo plasmado en el artículo 5 de la referida normativa y es la que ha mantenido de manera invariable esta Corporación a través de su jurisprudencia (Ver las sentencias CSJ SL13190-2015 y CSJ SL498-2016, entre muchas otras).*

*De igual forma, en sentencia CSJ SL118-2019, sobre el tema de compatibilidad y compatibilidad pensional, esta Corporación señaló:*

*Frente a este último punto, esta sala de la Corte ha señalado, con insistencia, que, por regla general, las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con las de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, pues la posibilidad de compartirlas sólo se generó tras la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985. Del mismo modo, ha adoctrinado que las excepciones a dicha regla sólo pueden provenir de un acuerdo entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.*

En este orden de ideas, cumple relieves ni el artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, ni ninguno de los otros artículos del Capítulo 10, referido a las pensiones convencionales (ver páginas 199-202) se pactó, acordó o convino de forma expresa la compatibilidad de la pensión de jubilación

convencional, con la pensión de vejez legal, y aunque es cierto que el artículo 62 del mismo compendio normativo establece que la pensión convencional por incapacidad total es incompatible con cualquier otra pensión que fije a ley (ver páginas 201-202), no resulta admisible entender, bajo una sistemática, integral y armónica interpretación del texto convencional, que la voluntad de las partes fue restringir la compatibilidad de las pensiones convencionales con la pensión legal, única y exclusivamente respecto de esta prestación, siendo que, en el artículo 58, se itera, expresamente se pactó “... *la pensión aquí fijada excluye y reemplaza que se sea señalada por las disposiciones legales*” (ver páginas 200-201).

Finalmente, y con el propósito de agotar los puntos de apelación propuestos, cumple memorar que la Corte Constitucional estableció que de los principios de articulación, organización y unificación que irradian la Ley 100 de 1993, se desprende la derogatoria orgánica de todas las normas que integraban el régimen de seguridad social anterior, (Sentencia SU-140 de 2019), sin embargo, para la Sala con la expedición de la Ley 100 de 1993 no se derogaron los Decretos 758 de 1990 y 2879 de 1985, en lo que respecta a la compartibilidad de la pensión de jubilación, siendo que la finalidad del Sistema General de Pensiones es garantizar el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte que venían siendo cubiertos por los patronos, ya fuere por disposición legal, contractual, convencional o reglamentaria.

En esta línea el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 al definir el Régimen de Prima Media con Prestación Definida señala “*Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones modificaciones y excepciones contenidas en esta Ley.*”

En vista de lo anterior, se colige que la pensión de jubilación convencional reconocida en favor del señor Jaime León Serna Molina, no es compatible sino compatible con la pensión de vejez legal, correspondiéndole a Itaú Corpbanca Colombia S.A. únicamente pagar el mayor valor que se hubiere causado entre la pensión convencional y la legal, estando acreditado que desde el 01 de abril de

2012, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones E.I.C.E. asumió en su integridad el pago de la prestación, por cuanto la pensión legal fue liquidada en cuantía superior a la jubilación convencional (pág.333, doc.07, carp.01).

#### **2.5.4.- Liquidación de la pensión de jubilación convencional**

Finalmente, y previo a determinar el monto, porcentaje o tasa de reemplazo con el que debió liquidarse la pensión de jubilación convencional reconocida en favor el señor Jaime León Serna Molina, se advierte que desde la fecha en que Itaú Corpbanca Colombia S.A. canceló la última mesada pensional en favor del actor, 31 de marzo de 2012 (pág.383, doc.02, carp.01; págs.331, 333, doc.07, carp.01), y la fecha en la que se radicó la presente acción, 11 de julio de 2022 (pág.04, doc.01, carp.01), transcurrieron más de los tres (3) años previstos en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por lo que, el derecho al reconocimiento de cualquier suma que se hubiere podido causar en favor del demandante por concepto de reajuste de la pensión convencional, se encuentra extinto por prescripción.

Distinto es que como consecuencia del reajuste se hubiese generado un mayor valor a cargo del empleador respecto al valor reconocido por la entidad de seguridad social, cuyos pagos futuros no estarían afectados por el fenómeno extintivo, sin embargo, no es posible determinarlo en primer lugar porque no se aportó la Resolución que reconoció la pensión de vejez del promotor del proceso desconociéndose el valor de la mesada pensional y segundo dado que revisado el artículo 54, de la Convención 1991-1993, folio 199 anexo 02, se observa que la regla de liquidación del monto de la prestación corresponde a: *“sobre los primeros seiscientos pesos (\$600) del promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, el 80% de dicho sueldo; por los excedentes de seiscientos pesos (\$600) hasta mil (1.000) pesos el 60%; por los excedentes de mil pesos (1.000) hasta tres mil pesos (\$3.000) pesos el 40%; y por los excedentes de tres mil pesos (3.000) el 30%. De manera que el compute de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, en acuerdo con el promedio del sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro de la Institución”*. De donde se colige que no es

posible determinar cuál es el porcentaje a aplicar en el caso del demandante, pues la interpretación exegética de la formula llevaría a un porcentaje del 210%.

En adicional a lo anterior se observa que el Banco reconoció un valor superior al 75% del IBL, toda vez que la disposición convencional establece que para liquidar el monto de la prestación se tendrá en cuenta el sueldo básico del año anterior al retiro, sin bonificaciones, esto es \$1.336.614 y en contraposición con tal regulación, la entidad bancaria para determinar el salario base de liquidación sumó las bonificaciones extralegales, por valor de \$3.953.625, además, al indexar la primera mesada no siguió la fórmula definida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  $VA = VH \times IPC \text{ Final} / IPC \text{ Inicial}$  (SL3841 y 3885 de 2019), sino que actualizó el IBL año a año (1998 al 2006) con el IPC, generándose así un valor final superior.

Por todo lo anterior, lo procedente será confirmar sentencia absolutoria de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de Jaime León Serna Molina por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de alzada. Se fijan como agencias en derecho, en favor de Itaú Corpbanca Colombia S.A., la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

### **3. – DECISIÓN**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

**1.-** Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario


laboral instaurado por Jaime León Serna Molina contra Itaú Corpbanca Colombia S.A.

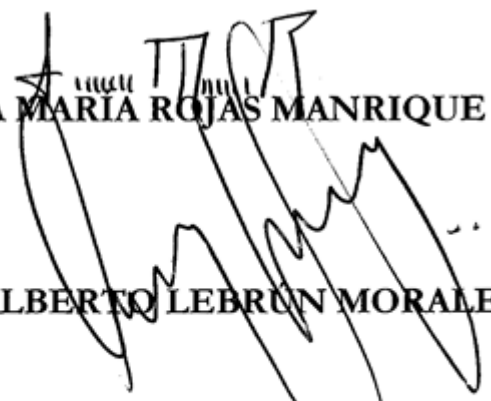
**2.-** Costas en esta instancia a cargo de Jaime León Serna Molina y en favor de Itaú Corpbanca Colombia S.A.; se fijan agencias en derecho en la suma la suma de \$1.160.000.

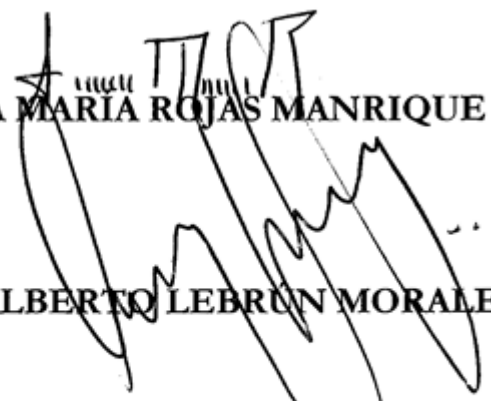
**3.-** Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones, cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

**(Sin firma por ausencia justificada)**